



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, dos (02) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

Magistrado Ponente:	OMAR EDGAR BORJA SOTO
Medio de Control	Nulidad y restablecimiento del derecho Laboral
Ref. Proceso	76-111-33-33-003-2021-00125-00
Demandante	JOSÉ ARNULFO FERNÁNDEZ
Demandado	UGPP
Correos:	<a href="mailto:accionjuridicaylegal@hotmail.es">accionjuridicaylegal@hotmail.es</a> <a href="mailto:wpiedrahita@ugpp.gov.co">wpiedrahita@ugpp.gov.co</a>
Link del expediente:	<a href="https://etbcsj.sharepoint.com/:f/r/teams/REPARTOSEGUNDAINSTANCIATRIBUNALADMINISTRATIVODELVALLEDELCAUC/EXPEDIENTES%20REPARTO%20PROCESOS%20DE%20SEGUNDA%20INSTANCIA/76111-33-33-003-2021-00125-01?csf=1&amp;web=1&amp;e=fecTMd">https://etbcsj.sharepoint.com/:f/r/teams/REPARTOSEGUNDAINSTANCIATRIBUNALADMINISTRATIVODELVALLEDELCAUC/EXPEDIENTES%20REPARTO%20PROCESOS%20DE%20SEGUNDA%20INSTANCIA/76111-33-33-003-2021-00125-01?csf=1&amp;web=1&amp;e=fecTMd</a>
Asunto:	Apelación de auto Excepción previa de inepta demanda – acto enjuiciable ante la administración-

Auto Nro. 348

I. OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala de Decisión el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante JOSÉ ARNULFO FERNÁNDEZ contra la providencia No. 498 de 14 de julio de 2022 (Minuto 04:45) proferido por el Juzgado Tercero Administrativo Del Circuito judicial de Guadalajara de Buga, que dispuso declarar probada de oficio la **excepción de inepta demanda, por cuanto el acto administrativo demandado no es pasible de control judicial** al no contener una decisión de fondo y, como consecuencia de lo anterior, dio por terminado el proceso.

II. ANTECEDENTES

Pretende la parte demandante con el presente medio de control que se declare la nulidad del administrativo contenido en el auto ADP 007763 del 03 de diciembre de 2019, mediante el cual la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP, que ordenó archivar las actuaciones iniciado el 13 de septiembre de 2019, sin que se resolviera de fondo el reconocimiento de la pensión gracia al señor JOSE ARNULFO HERNANDEZ PAYAN.

El Juzgado Tercero Administrativo Del Circuito judicial de Guadalajara De Buga en la audiencia inicial emitió el auto interlocutorio No. 498 de 14 de julio de 2022 (Minuto 04:45), por medio del cual resolvió:

1. Declarar probada de oficio la excepción de inepta demanda, por cuanto el acto administrativo demandado no es pasible de control judicial al no contener una decisión de fondo.
2. Como consecuencia de lo anterior, término el proceso.

Como argumentos a su decisión señaló lo siguiente:

Así, de la lectura del acto acusado se colige claramente como el mismo no es un verdadero acto administrativo definitivo sino de trámite, que impide ser objeto de control judicial, comoquiera que **no resolvió la situación jurídica particular de la parte demandante ni puso fin a la actuación administrativa**, toda vez que este se limitó a presentar argumentos encaminados a **señalar la firmeza de la Resolución RDP 19084 del 26 de Junio de 2019** y el archivo de la solicitud del actor, referente al reconocimiento de la pensión gracia.

En efecto, revisada la **Resolución RDP 19084 del 26 de junio de 2019 allegada al plenario, se advierte como en la misma se le negó la prestación** pensional ahora pretendida, advirtiendo además en la parte resolutive del auto la procedencia de los recursos de reposición y apelación, respecto a los cuales no se tiene certeza de su interposición. Siendo ello así, se itera, el Auto ADP 07763 del 3 de diciembre de 2019 proferido por la UGPP que hoy se demanda, no refleja la voluntad de la administración en el sentido de crear, modificar o extinguir la situación jurídica particular del peticionario, ni mucho menos pone fin a la actuación administrativa, por lo que hay lugar a declarar probada de oficio la excepción de inepta demanda por cuanto el acto administrativo demandado no es pasible de control judicial al no contener una decisión de fondo, trayendo como consecuencia la terminación del proceso.

En este punto, es menester precisar que, como se anunció desde el principio, el yerro resulta insanable, por versar el proceso solamente sobre la nulidad del Auto ADP 07763 del 3 de diciembre de 2019.

Si en gracia de discusión se considerara en esta etapa acusar la Resolución RDP 19084 del 26 de Junio de 2019, se repite, al parecer contra la misma no se agotó el recurso obligatorio de ley, la apelación, aunado a que además este acto correspondería a una nueva pretensión que de incluirse ahora, cercenaría los derechos de defensa y contradicción de la contraparte.

### **Recurso interpuesto:**

El apoderado de la parte demandante presentó y sustentó recurso de apelación contra la anterior decisión, argumentando lo siguiente:

El apoderado de la parte actora interpone RECURSO DE APELACIÓN, el cual sustenta en la audiencia (Desde el minuto 14:12 hasta el minuto 19:18), manifestando en síntesis que, la decisión proferida por el despacho es contraria a derecho e incurre en un defecto fáctico y sustantivo, afirmado que, si bien es cierto, se demandó el Auto ADP 07763 del 3 de diciembre de 2019, también es cierto que dicho auto administrativo, aunque no decidió la situación de su mandante, sí impidió que la actuación administrativa pudiera seguir adelante, y que el artículo 43 del CPACA establece que son demandables los actos administrativos que ponen fin a la situación administrativa **o que impiden continuar la actuación** administrativa.

El togado asevera que, en este escenario, se está frente a una nueva actuación administrativa que se había generado a partir de la petición que presentó su mandante, mediante la cual solicitaba una vez más, se le reconociera la pensión gracia, y que, aunque ya existía un pronunciamiento, por tratarse de una pensión, que es una prestación de tracto sucesivo, el ordenamiento le otorga la facultad de

volver a presentar la reclamación sobre las nuevas mesadas, y que la administración tiene el deber de pronunciarse y establecer si le asiste derecho o no sobre esas nuevas mesadas que se causaron después de la expedición del acto administrativo, que en principio le negó la pensión, sobre el que no se interpusieron los recursos y no se pudo controvertir en sede judicial.

También señala que, como la administración no se pronunció respecto a la segunda reclamación administrativa que solicitaba el reconocimiento de la pensión, en ese sentido, el acto aquí demandado sí impide continuar con esa nueva actuación administrativa, y por lo tanto a este despacho le asiste la competencia para establecer la legalidad de dicho auto.

En consecuencia, el abogado solicita al Tribunal revocar la decisión del despacho, por cuanto, a su parecer, no se acompasa a los cánones establecidos en el artículo 43 CPACA

### **III. CONSIDERACIONES**

#### **Competencia**

Esta Corporación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con el artículo 153 del C.P.A.C.A. que atribuye a los Tribunales Administrativos, en segunda instancia, el conocimiento de los recursos de apelación interpuestos contra los autos dictados en primera instancia por los jueces administrativos, susceptibles de dicho medio de impugnación.

El pronunciamiento será emitido por la Sala, en los términos del artículo 125 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 243 *ibídem*.

Valga resaltar que se tendrá en cuenta las reformas procesales introducidas al CPACA con la entrada en vigencia de Ley 2080 de 2021, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 del mismo estatuto, en concordancia con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, atendiendo que el recurso fue interpuesto cuando estaba vigente ta mandato.

#### **Problema jurídico**

En atención al recurso de apelación interpuesto, el problema jurídico se contrae a determinar si el acto administrativo acusado, esto es auto ADP 007763 del 03 de diciembre de 2019, mediante el cual la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP, ordenó archivar las actuaciones iniciado el 13 de septiembre de 2019, sin que se resolviera de fondo el reconocimiento de la pensión gracia al señor JOSE ARNULFO HERNANDEZ PAYAN, es o no enjuiciable ante esta jurisdicción

#### **Tesis de la Sala de Decisión:**

La Sala de Decisión determinará que el acto ADP 007763 del 03 de diciembre de 2019 **no es susceptible control judicial** ante la jurisdicción de lo contencioso

administrativo para analizar su legalidad, en tanto, no es un acto administrativo enjuiciable.

### **Consideración previa: configuración de la excepción de inepta demanda.**

Previo a resolver sobre el fondo del asunto, encuentra la Sala de Decisión necesario realizar algunas precisiones formales sobre la aplicación desmedida de la figura de ineptitud de la demanda como mecanismo exceptivo. Ello con miras a ajustar las decisiones judiciales de este Circuito Judicial del Valle del Cauca a los recientes pronunciamientos emitidos por el Consejo de Estado<sup>1</sup> sobre la materia.

En efecto, el ordenamiento jurídico colombiano<sup>2</sup> consagra de manera expresa la excepción previa denominada “Ineptitud de la demanda”, encaminada fundamentalmente a que se adecúe la misma a los requisitos de forma que permitan su análisis en sede judicial, so pena de la terminación anticipada del proceso. Esta se da por dos razones:

- a) por falta de los requisitos formales y
- b) por indebida acumulación de pretensiones.

El Jurista Fernando Canosa Torrado<sup>3</sup> contempla como causales para la procedencia de la **excepción previa de ineptitud de la demanda solo la falta de requisitos formales o indebida acumulación de pretensiones** y sobre el particular señala:

*“Como se dijo antes la ineptitud de la demanda incide en la posibilidad que tiene el juez en dictar sentencia de mérito decidiendo el fondo del litigio. Caso contrario el fallo será meramente formal o inhibitorio. La Corte al referirse al tema de las condiciones para que una inepta demanda determine una sentencia inhibitoria dijo: “Tratándose del presupuesto procesal de demanda en forma, la Corte ha precisado que “el defecto que debe presentar una demanda para que se le pueda calificar de inepta o indebida forma tiene que ser verdaderamente grave, trascendente y no cualquier informalidad superable lógicamente, pues bien se sabe que una demanda “... Cuando adolece de cierta vaguedad es susceptible de ser interpretada por el juzgador, con el fin de no sacrificar un derecho y siempre que la interpretación no varié los capítulos petitorios del libelo...”; “... En la interpretación de una demanda – afirma categóricamente la Corte – existe el poder necesario para ir tras lo racional y evitar lo absurdo”. Y no puede ser de otra manera, se reitera, porque si, como quedó señalado, en las actuaciones judiciales debe prevalecer el derecho sustancial, no pueden los jueces escudarse en la existencia de cualquier error de la demanda, para proferir decisión inhibitoria y, por esa vía, lisa y llanamente se señala, abstenerse de administrar justicia, lo que constituiría, per se, inaceptable – amén que reprochable – incumplimiento a sus elevados deberes.*

*“Por consiguiente, aunque la medida del derecho litigado contribuye a darle precisión a la pretensión y, en tal virtud, es aconsejable que el demandante establezca – ab initio – el alcance cuantitativo del derecho cuyo conocimiento persigue, la omisión de ese específico tópico no se erige el detonante de una decisión inhibitoria, a pretexto de*

<sup>1</sup> Ver entre otras, providencia del veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós (2022) Ref. Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 25000 23 42 000 2015 03355 01 (3754-2018) C.P. C. P. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ y SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A – C.P.: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ, providencia del veintitrés (23) de julio de dos mil veinte (2020). Radicación: 25000-23-42-000-2017-01023-01(4994-19)

<sup>2</sup> Numeral 5 del artículo 100 del Código General del Proceso.

<sup>3</sup> Torrado Canosa Fernando; Las excepciones previas en el Código General del Proceso Ediciones Doctrina y Ley Quinta Edición – Pág. 188 -

*la falta de configuración del presupuesto procesal de demanda en forma, habida cuenta que “no es condición para la idoneidad formal de la demanda el que se puntualice todos los por menores que se estimen relevantes en las súplicas (petitum) o en los hechos que las fundamentan (causa pretendí) sino que basta fijar, “los que son primordiales en orden de especificar el origen la identidad de la pretensión”*

Pues bien, con ajustado criterio el Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha señalado que es una **imprecisión jurídica** acudir a la figura de ineptitud sustantiva de la demanda como si se tratara de una causal de rechazo<sup>4</sup>.

Lo anterior en virtud de lo señalado por el artículo 100 del CGP que refiere que la excepción de «ineptitud sustantiva de la demanda» es **única y exclusivamente** cuando en la demanda se observe la i) falta de los requisitos formales o ii) una indebida acumulación de pretensiones, caso en el cual lo procedente sería intentar sanear el asunto y no rechazarlo de plano.

En suma, casos como el aquí estudiado, donde se analiza si el acto es o no susceptible de control judicial, lo **procesalmente correcto es rechazar la demanda por tal circunstancia y no acudir al fenómeno de inepta demanda**, pues la situación fáctica no se adecúa en ninguno de los supuestos en que el ordenamiento colombiano consagra de manera expresa la excepción, se reitera i) falta de los requisitos formales o ii) una indebida acumulación de pretensiones

Frente a este tema, de forma reiterada en casos análogos ha señalado el Consejo de Estado lo siguiente:

Antes de abordar el estudio del problema jurídico propuesto, deben realizarse algunas precisiones preliminares respecto a la denominada «ineptitud sustantiva de la demanda». Al respecto, esta Subsección ha señalado que con anterioridad se ha hecho alusión a esta figura como si se tratara de una excepción previa o causal de rechazo de la demanda y en últimas, como sustento de decisiones inhibitorias, lo cual **constituye una imprecisión**.

Ello, toda vez que sólo es viable proponer y declarar próspera la excepción previa de «ineptitud de la demanda por la falta de cualquiera de los requisitos formales» o «por la indebida acumulación de pretensiones» y en relación con otras situaciones debe acudirse a las demás excepciones previas previstas en el artículo 100 del Código General del Proceso, sin que haya vocación para realizar una denominación en términos diferentes a los señalados por la ley.

Así mismo, se recalcó que al encontrarse otras falencias que otrora han servido como sustento para la declaratoria de una «ineptitud sustantiva de la demanda», en lugar de acudir a esa denominación deben utilizarse las herramientas que los estatutos procesales prevén al respecto, tal como se analizó extensamente en el auto en cita, esto es, aquellos mecanismos de saneamiento, como por ejemplo, ordenar corregir la demanda o dejar sin efecto el auto admisorio, para proceder al rechazo de la misma, en atención a la causal legalmente prescrita para el efecto.

Colofón de lo expuesto y en atención a los presupuestos fácticos del caso bajo examen, debemos precisar que el *a quo*, en el trámite de la audiencia inicial, negó la declaratoria de la excepción denominada por el señor Fabricio Pinzón Barreto como «inepta demanda porque uno de los actos demandados, el oficio SG núm. 4161 del 12 de agosto de 2016, no es susceptible de control judicial». Para soportar su decisión señaló que, en aplicación a lo dispuesto en el auto proferido por la Sección

---

<sup>4</sup> Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, providencia de 21 de abril de 2016, Rad. 47-001-23-33-000-2013-00171-01 (1416-2014).

Segunda de esta corporación el 21 de abril de 2016<sup>5</sup>, la inepta demanda se configura por dos razones: i) falta de requisitos formales (artículos 162, 163, 166 y 167 del CPACA) e ii) indebida acumulación de pretensiones (artículo 138 y 165 del CPACA) y que, en ninguna de las citadas normas se exige que los actos demandados sean objetables ante la administración de justicia, lo que implica que no se configure el medio exceptivo propuesto.

Ante este panorama, es pertinente precisar, como ya se explicó, que la providencia en mención y en la que se fundamentó el tribunal para negar la declaratoria del medio exceptivo propuesto, luego de hacer una revisión histórica de la utilización de la denominada «ineptitud sustantiva de la demanda», en efecto precisó que en la actualidad es viable proponer y declarar próspera la excepción previa de «ineptitud de la demanda por la falta de cualquiera de los requisitos formales» o «por la indebida acumulación de pretensiones». **En atención a lo cual, hace un llamado a la correcta utilización del concepto de «ineptitud sustantiva de la demanda» únicamente en los dos eventos citados en precedencia.**

Lo anterior permite afirmar que, si bien la excepción propuesta por el tercero vinculado fue denominada como «inepta demanda porque uno de los actos demandados, el oficio SG núm. 4161 del 12 de agosto de 2016, no es susceptible de control judicial», **lo cierto es que los argumentos de la misma, no se adecúa en ninguno de los supuestos en que el ordenamiento colombiano consagra de manera expresa la excepción previa denominada ineptitud de la demanda.** Sin embargo, la denominación errada de dicha excepción, en ningún momento, releva al juez de primera instancia para estudiar de fondo los planteamientos en los que se sustentó la misma, esto es, si el acto administrativo contenido en el oficio SG núm. 4161 de 2016 es un simple acto de comunicación no enjuiciable ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Repárese que la imposibilidad de control judicial de la actuación acusada, puede **considerarse como un presunto vicio o falencia que puede ser resuelta a través de otro tipo de mecanismos de saneamiento procesal**, pues, lo contrario, conllevaría a que se tramitara todo un proceso para llegar finalmente a una decisión de carácter inhibitorio. Situación que precisamente busca evitar el deber contemplado en el ordinal 5.º del artículo 180 del CPACA. Así pues, el hecho de que el oficio demandado presuntamente no sea susceptible de control judicial, como se planteó la excepción, pudo haberse resuelto desde la audiencia inicial, a fin de depurar con claridad los aspectos necesarios o indispensables para resolver el problema jurídico que subyace en la controversia suscitada entre las partes.

En suma, atendiendo que si bien el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito judicial de Guadalajara de Buga en la audiencia inicial emitió en la etapa de saneamiento el auto interlocutorio No. 498 de 14 de julio de 2022 que declaró probada la excepción de inepta demanda al ser el acto no susceptible de control judicial, lo cierto es que dicho argumento no se ajusta a una i) falta de los requisitos formales de la demanda o ii) una indebida acumulación de pretensiones y con fundamento en ello, lo correcto sería, si hay lugar a ello, dar por terminado el proceso al ser **el acto no susceptible de control judicial** en los términos del art. 169 del CPACA. tal como lo ha señalado recientemente el Consejo de Estado<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Auto del 21 de abril de 2016, Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, radicado: 47-001-23-33-000-2013-00171-01 (1416-2014).

<sup>6</sup> Providencia 28 de abril de dos mil veintidós (2022) Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 25000 23 42 000 2015 03355 01 (3754-2018) C.P. C. Ponente: Gabriel Valbuena Hernández

### Caso concreto:

Conforme con lo dispuesto por el artículo 43 del C.P.A.C.A. los actos susceptibles de ser demandados ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo o **actos definitivos**, son aquellos que producen efectos jurídicos **directos** o **indirectos**, es decir, aquellos que crean, modifican, reconocen o extinguen situaciones jurídicas como aquellos que imposibilitan continuar la actuación administrativa, *“siempre que afecten derechos o intereses, impongan cargas, obligaciones o sanciones o incidan en situaciones jurídicas”*<sup>7</sup>; distinguiéndose así los actos administrativos de carácter definitivo, de aquellos de trámite y ejecución.

Se entiende por actos de **trámite** o preparatorios aquellos *“que tienen como objeto impulsar un procedimiento administrativo sin que esto implique la determinación de una situación jurídica concreta”*<sup>8</sup> y por actos de **ejecución** los que *“se limitan a dar cumplimiento a una decisión judicial o administrativa, sin que pueda afirmarse que de ellos surjan situaciones jurídicas diferentes a las de la sentencia o acto ejecutado”*<sup>9</sup>.

En el caso de autos, se tiene que el auto ADP 007763 del 03 de diciembre de 2019 proferido por UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP, resolvió lo siguiente:

Que la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL hoy Liquidada, mediante resolución No. PAP 004380 del 04 de mayo de 2010, negó el reconocimiento de una pensión de jubilación gracia al señor HERNANDEZ PAYAN JOSE ARNULFO identificado con cedula de ciudadanía No. 2631498 de San Pedro.

Que esta Entidad mediante resolución No. RDP 006864 del 19 de febrero de 2015, negó el reconocimiento de una pensión de jubilación gracia al señor HERNANDEZ PAYAN JOSE ARNULFO identificado con cedula de ciudadanía No. 2631498 de San Pedro.

Que esta Entidad mediante resolución No. RDP 19084 del 26 de Junio de 2019, negó el reconocimiento de una pensión de jubilación gracia al señor HERNANDEZ PAYAN JOSE ARNULFO identificado con cedula de ciudadanía No. 2631498 de San Pedro.

Que mediante radicado 2019500502848402 de fecha 13 de Septiembre de 2019 el apoderado del señor (a) HERNANDEZ PAYAN JOSE ARNULFO allega escrito solicitando nuevamente se reconozca la pensión gracia sin aportar documento alguno.

Que teniendo en cuenta lo anterior se evidencia que la petición se encuentra resuelta mediante resolución RDP 19084 del 26 de Junio de 2019, siendo necesario remitirnos a lo estipulado en el Artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual establece:

Finalmente, la UGPP en el auto mencionado resolvió:

<sup>7</sup> Consejo de Estado, Sección Cuarta, auto de 1 de octubre de 2014, radicación No. 11001-03-27-000-2014-00041-00 (21170), C.P. Jorge Octavio Ramírez.

<sup>8</sup> Ib.

<sup>9</sup> Ib.



Que con la presente solicitud no se aportan nuevos elementos de juicio diferentes a los ya tenidos en cuenta, razón por la cual no habrá lugar por parte de esta entidad a emitir nuevamente un pronunciamiento respecto a la solicitud incoada.

Que en cumplimiento de la norma citada y teniendo en cuenta que la solicitud elevada el 13 de Septiembre de 2019 por parte del apoderado del señor (a) HERNANDEZ PAYAN JOSE ARNULFO se encuentra resuelta con la Resolución RDP 19084 del 26 de Junio de 2019 y que no aporte diferentes elementos de juicio que permitan variar la decisión allí tomada se aclara al interesado que nos encontramos frente al fenómeno de la firmeza del Acto Administrativo, motivo por el cual se ordena el Archivo de la solicitud.

Es claro para esta Sala de Decisión que efectivamente el auto ADP 007763 del 03 de diciembre de 2019 proferido por la UGPP no resolvió de fondo la solicitud y, en virtud del artículo 19<sup>10</sup> de la Ley 1755 de 2015 **se remitió a la respuesta ya otorgada** en la Resolución RDP 19084 del 26 de junio de 2019 que si la resolvió de fondo.

En efecto, se evidencia como bien lo señaló el Juzgado de instancia que el acto administrativo que resolvió de fondo la solicitud de pensión fue, entre otras, la Resolución RDP 19084 del 26 de junio de 2019 (folio 30), por medio de la cual se negó tal reconocimiento y por tanto es aquella la susceptible de control judicial y no el auto ADP 007763 del 03 de diciembre de 2019 como se señaló en la demanda.

Por tanto, el hecho que la UGPP en el auto ADP 007763 del 03 de diciembre de 2019 se remita a la respuesta otorgada en la Resolución RDP 19084 del 26 de junio de 2019, ello no tiene la virtud de mutar su naturaleza de acto de trámite - informativo - , a acto definitivo que le pusiera fin a la actuación administrativa, ni mucho menos se podría decir que dicho acto de trámite impedía continuar la actuación de la administración, pues en él la accionada no estaba negando o accediendo a lo petitionado por el actor, de suerte que no se hallaba creando, modificando o extinguiendo una situación jurídica en especial, que afectara de manera negativa o positiva lo solicitado, pues no se estaba decidiendo el fondo del asunto.

En esa medida, el auto demandando no puede ser contemplado como un verdadero acto administrativo, ya que, se itera, no creó, modificó o extinguió situación jurídica particular alguna del actor respecto de la pensión, por lo tanto, no es posible que sea objeto de control judicial ante la jurisdicción contencioso

---

<sup>10</sup> **ARTÍCULO 19. Peticiones irrespetuosas, oscuras o reiterativas.** Toda petición debe ser respetuosa so pena de rechazo. Solo cuando no se comprenda la finalidad u objeto de la petición esta se devolverá al interesado para que la corrija o aclare dentro de los diez (10) días siguientes. En caso de no corregirse o aclararse, se archivará la petición. En ningún caso se devolverán peticiones que se consideren inadecuadas o incompletas.

Respecto de peticiones reiterativas ya resueltas, la autoridad podrá remitirse a las respuestas anteriores, salvo que se trate de derechos imprescriptibles, o de peticiones que se hubieren negado por no acreditar requisitos, siempre que en la nueva petición se subsane.



administrativo lo que conlleva a rechazar la demanda en los términos del art. 169 del CPACA.

Escenario por el que la Sala deberá revocar la decisión del Tribunal, para que, en lugar, se tenga como fundada la excepción, bajo la denominación de **«acto no susceptible de control judicial»** y no la de ineptitud de la demanda, puesto que esta última hace referencia según lo contemplado en el numeral 5 del artículo 100 del Código General del Proceso, cuando se discuta la falta de los requisitos formales estipulados en los artículos 161 al 166 del CPACA o por la indebida acumulación de pretensiones como se indicó en la consideración previa de esta providencia.

Por último, quiere dejar expuesto esta Sala de Decisión que el dicho de paso del Juzgado de Instancia en el que indica que la ausencia del recurso de apelación contra la Resolución RDP 19084 del 26 de junio de 2019 “impide acudir a la jurisdicción contenciosa” por ser este recurso obligatorio, no es del todo cierto por las siguientes razones:

El Consejo de Estado frente al agotamiento de la actuación administrativa (recursos obligatorios art. 76 del CPACA) ha realizado un juicioso estudio cuando se trata de personas de la tercera edad, pues en estos asuntos se puede afectar la seguridad social como derecho constitucional, y en él se adquiere una connotación ius fundamental en razón de la debilidad manifiesta de dicho grupo poblacional. Sobre el particular, el Alto Tribunal<sup>11</sup> señaló:

Así, en los casos en donde el juez advierte una transgresión abierta a las normas constitucionales que imponen a las autoridades la protección -cuando hay lugar a ello- de los derechos de las personas de la tercera edad, es su deber reivindicar la supremacía del ordenamiento fundamental inaplicando la normatividad inferior por vía de la excepción de inconstitucionalidad, con el objeto de mantener incólume el orden jurídico en su escala jerarquizante y de garantizar la protección de los derechos de las personas, toda vez que no concuerda priorizar la exigencia prevista por el Legislador que impone el deber de agotamiento de los recursos -recurso de apelación-, a título de condición para el acceso al control judicial de un acto administrativo que niega el derecho prestacional, en razón a que en esta voluntad negativa de la administración y su correlativo control judicial, gravita la concreción del deber del Estado para proteger la vigencia de los derechos prestacionales, que desde luego no implica su necesario reconocimiento sino el análisis por parte del fallador acerca de la existencia o no de dicha garantía iusfundamental.

Por tanto, le corresponderá a la parte demandante analizar si las condiciones fácticas se ajustan a los parámetros expuestos por el Consejo de Estado para inaplicar la norma legal que exige el agotamiento de los recursos y en tal sentido, podrá, si así lo quiere, acudir a la Jurisdicción Contenciosa para que se declare la nulidad de los actos definitivos que resolvieron la negación del reconocimiento pensional deprecado, situación que no se puede corregir de oficio en esta oportunidad dado el alcance de la justicia rogada de esta Jurisdicción y el debido proceso que le asiste a la parte demandada al haberse trabado la litis en los términos pretendidos en la demanda inicial, amén que de conformidad con el art. 169 del CPACA el acto no susceptible de control jurisdiccional es causal de rechazo de plano de la demanda.

---

<sup>11</sup> SECCION SEGUNDA - SUBSECCION A - Consejero ponente: GUSTAVO EDUARDO GOMEZ ARANGUREN, providencia del diecisiete (17) de agosto de dos mil once (2011). Radicación número: 76001-23-31-000-2008-00342-01 (2203-10)

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,

**RESUELVE:**

**REVOCAR** la providencia No. 498 de 14 de julio de 2022 proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito judicial de Guadalajara de Buga, que declaró probada la excepción de inepta demanda y, en su lugar, **DECLÁRESE LA TERMINACIÓN DEL PROCESO** al ser el auto ADP 007763 del 03 de diciembre de 2019 no susceptible de control judicial lo que produce el rechazo de la demanda en los términos del art. 169 del CPACA.

**CÓPIESE, NOTIFÍQUESE** y ejecutoriada esta providencia; **DEVUELVA** el expediente al juzgado de origen. Dese cumplimiento por Secretaría.

Proyecto discutido y aprobado en Sala de Decisión de la fecha

Los Magistrados,

(Ausente con permiso)  
**ÓSCAR SILVIO NARVÁEZ DAZA**

(Firmado electrónicamente)  
**EDUARDO ANTONIO LUBO BARROS**

(Firmado electrónicamente)  
**OMAR EDGAR BORJA SOTO**

NOTA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma SAMAI

JGV